

Percepciones Hemisféricas sobre la Crisis Colombiana

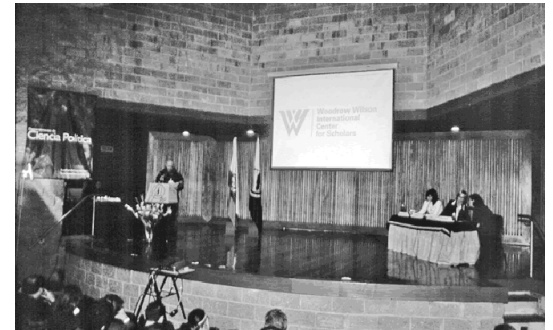
Relatoría realizada por Rut Diamint y Arlene B. Tickner

El 21 y 22 de octubre de 2004 se realizó en la Universidad de los Andes, en Bogotá, la conferencia internacional "Percepciones Hemisféricas sobre la Crisis Colombiana". Fue organizada por Arlene B. Tickner, profesora del Departamento de Ciencia Política, como parte del programa Creando Comunidad en las Américas. La Fase de la Institucionalización es coordinada por el Latin American Program del Woodrow Wilson International Center for Scholars, de Washington, D.C. y cuenta con el apoyo de la Fundación Ford.

La conferencia analizó cómo los países de la región interpretan la crisis colombiana en términos de su propia seguridad y de la seguridad hemisférica. Los participantes examinaron la manera en que el conflicto armado ha securitizado la problemática colombiana. Se coincidió en que la regionalización (o derrame) de la crisis de seguridad de Colombia, ha sido entendida de maneras distintas por Brasil, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Perú y Venezuela, dependiendo de las dinámicas internas de seguridad de cada uno de ellos, de la evolución de sus relaciones con Colombia, y de su visión acerca de la política de Estados Unidos en la región.

Participaron Miriam Kornblith, de la Universidad Central de Venezuela; Pablo Andrade, de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito; Alcides Costa Vaz, Universidade de Brasília; Isaías Rojas, de Johns Hopkins University, quien presentó el caso de Perú; Bruce Bagley, Universidad de Miami, para el caso estadounidense; y Carla Pousa, del Consejo de Seguridad Pública de Panamá, quien envió su texto. La visión desde Colombia fue presentada por Marcela Ceballos y Harvey Suárez, de la Consultoría de Derechos Humanos (Codhes), Arlene B. Tickner, y Alfredo Rangel, de la Fundación Seguridad & Democracia. El primer día se realizó una reunión cerrada en la que participaron académicos expertos en el tema de la seguridad, funcionarios del cuerpo diplomático

LATIN AMERICAN PROGRAM Woodrow Wilson Center



Arlene Tickner y Ann Mason de la Universidad de los Andes

de Colombia y América Latina, militares colombianos y miembros de ONG de derechos humanos. En cada uno de los cuatro paneles hubo un comentarista. Ellos fueron Rodrigo Pardo, ex Canciller de Colombia y subdirector del periódico El Tiempo; Rut Diamint, profesora de la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires; Raúl Benítez, profesor de la UNAM de México; y Ann Mason, directora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. El segundo día hubo una conferencia abierta, con la asistencia de numerosos estudiantes y profesores de varias universidades de Bogotá, representantes de ONG, funcionarios públicos colombianos, diplomáticos y periodistas. Se inició con una conferencia del General Carlos Alberto Ospina, comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, quien describió la amenaza que representa el conflicto armado para la seguridad de los países vecinos, así como los avances logrados en la guerra contra la insurgencia y como resultado de la implementación del Plan Patriota. El General Ospina afirmó que su misión es ganar la guerra militarmente, para que luego las autoridades políticas puedan negociar y asentar la democracia en Colombia.

A continuación se presenta un resumen de las



Woodrow Wilson
International Center
for Scholars

LATIN AMERICAN PROGRAM



presentaciones y debates realizados durante el taller cerrado.

VENEZUELA Y ECUADOR

Miriam Kornblith afirmó que los intereses políticos de los diversos actores venezolanos en conflicto constituyen el filtro principal por el cual pasa la representación de la crisis colombiana actual. En este sentido, destacó que el problema de las percepciones puede evaluarse en tres planos: primero, los efectos objetivos del conflicto en Venezuela; segundo, la evaluación de los mismos que hacen los actores políticos y económicos; finalmente, el uso que éstos hacen del problema colombiano para sus propios fines políticos. La intensificación de la polarización interna en ese país ha sido un factor determinante del manejo de la información relacionada con Colombia.

Dado que el régimen del presidente Hugo Chávez se identifica como revolucionario, ha sido reacio a calificar a los grupos guerrilleros como terroristas. Para el gobierno venezolano, Colombia se ha convertido en una amenaza, no solo por la presencia de emigrantes colombianos en ese país, sino también por la presencia creciente de Estados Unidos en la región a través del Plan Colombia. La estrecha asociación que existe entre Washington y Bogotá vuelve aún más complejas las relaciones entre Venezuela y Colombia, ya que Chávez considera al gobierno de Álvaro Uribe cómplice de este proyecto de expansión estadounidense.

Por su parte, la oposición considera que Chávez ha favorecido a la guerrilla y a los narcotraficantes, lo cual ha repercutido en la “colombianización” de la dinámica política interna de Venezuela. Además, las fuerzas armadas venezolanas hoy están asociadas al proyecto del gobierno, con lo cual las relaciones con su contraparte colombiana se han deteriorado.

Pablo Andrade comenzó su análisis señalando que a pesar de que la seguridad es un bien colectivo y compartido, la crisis colombiana se ha procesado en países como Ecuador como un problema de seguridad nacional y no de seguridad regional. Aunque el narcotráfico ocupa un lugar central en la agenda ecuatoriana con Colombia y Estados Unidos, Andrade rechazó la idea de que la implementación del Plan Colombia hubiera producido un efecto globo en Ecuador en términos del crecimiento de cultivos ilícitos y de su papel como proveedor de insumos químicos.

Si bien ni el tema de las drogas ni el de los actores armados colombianos se han interpretado en Ecuador

como amenazas a la seguridad nacional, los efectos ambientales de la fumigación aérea y el problema de los desplazados y refugiados colombianos se ven con creciente preocupación. En cuanto a la fumigación, ésta ha producido la contaminación de aguas, tierras y cultivos, así como problemas de salud pública por intoxicación química al lado ecuatoriano de la frontera. Entre 1999 y 2004, Andrade afirmó que hubo un crecimiento de más de 1600% en el número de desplazados colombianos en el Ecuador. Alertó que el efecto principal del desplazamiento es “la exportación de la desigualdad”, ya que los emigrantes se incorporan al sector informal de la economía, limitando el impacto en el crecimiento económico y creando consecuencias negativas en el mercado laboral nacional.

En ese contexto, la base aérea estadounidense en Manta, es percibida por el gobierno ecuatoriano como positiva, debido a que ha sido usada para el control del tráfico de narcóticos y también ha permitido frenar la inmigración ilegal hacia Estados Unidos. Se observa en el contexto ecuatoriano una tendencia de incremento de los gastos en defensa, desviando recursos necesarios para el desarrollo hacia una modernización asociada a la vinculación con los militares estadounidenses y una securitización de la agenda nacional.

En los comentarios de Rodrigo Pardo se destacó la incidencia protagónica de Estados Unidos en la visión de seguridad y sus dinámicas en la región. Ésta es aún más pronunciada, dada la ausencia de esquemas propios de seguridad, la disminución de un espíritu colectivo regional y la tendencia creciente a relacionarse cada país de forma bilateral con Washington. Si bien el problema de Colombia tiene efectos objetivos innegables sobre los vecinos, Pardo preguntó qué tanto pesará en la percepción de amenaza asociada a la crisis

Rodrigo Pardo destacó la incidencia protagónica de Estados Unidos en la visión de seguridad y sus dinámicas en la región... la disminución de un espíritu colectivo regional y la tendencia creciente a relacionarse cada país de forma bilateral con Washington.



General Carlos Alberto Ospina, comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia.

colombiana la estrecha relación del presidente Uribe con Estados Unidos. Se coincidió en que la precariedad institucional que caracteriza a la región andina, junto con el deterioro en los niveles de comprensión mutua y colaboración en el ámbito de la seguridad, son factores determinantes que permiten entender la utilización del tema colombiano para fines políticos internos en cada país.

BRASIL Y PERÚ

Alcides Costa Vaz sostuvo que en Brasil, las distancias geográficas, políticas y sociales tienen un efecto importante en la creación de percepciones en ese país sobre Colombia. En particular, destacó que existe un amplio desconocimiento sobre el origen y la evolución del conflicto colombiano. Si bien en el gobierno existen interpretaciones más precisas, la diplomacia, la prensa, el mundo académico y el Congreso, no consideran a Colombia un tema de la agenda interna ni externa del Brasil.

En términos generales, la percepción brasileña se limita a la situación de seguridad interna que se vive en las áreas de frontera y en las zonas urbanas, asociada directa o indirectamente con la crisis colombiana. Costa Vaz afirmó que la visión más difundida entre la sociedad brasileña se relaciona precisamente con los niveles crecientes de violencia, pandillas criminales, y tráfico de armas y drogas en las favelas de Rio de Janeiro y São Paulo, y su asociación con el conflicto colombiano. Brasil ha identificado un “arco” de inseguridad desde la Triple Frontera hasta Guyana y Suriname, del cual Colombia forma parte.

Si bien existen posiciones heterogéneas respecto de la crisis colombiana, Costa Vaz indicó que su

conversión en un asunto interno de Brasil, junto con la creciente presencia militar de Estados Unidos en la región, constituyen un denominador común de todas las perspectivas brasileñas. El Presidente Lula ha sido explícito en señalar que la situación de Colombia es un tema político interno de ese país, a fin de evitar la regionalización del problema y su tratamiento regional.

Para el caso del Perú, Isaías Rojas afirmó que el tema colombiano no está presente entre las preocupaciones cotidianas de la ciudadanía, salvo en unas pocas zonas limítrofes, pero que sí constituye un tema de la agenda política interna. Argumentó que una manera de entender el lugar ocupado por la crisis colombiana en la política peruana es el examen de qué es lo que se regionaliza en relación con ésta.

A partir de allí, ofreció tres escenarios en los que la regionalización tiene lugar. El primero es el nivel local de la frontera, en donde se suponía que había problemas de refugiados, conflictos limítrofes y expansión de los cultivos ilícitos. Sin embargo, el gobierno peruano demostró que no existen efectos masivos del conflicto colombiano, solo hay presencia no violenta de grupos armados colombianos en la zona de frontera, la contratación de colonos peruanos de parte de éstos, un flujo considerable de refugiados, y el traslado de jóvenes peruanos a trabajar como raspachines al otro lado de la frontera.

La segunda dimensión señalada por Rojas es la relación bilateral entre Perú y Colombia. Éste señaló que durante la presidencia de Fujimori, el primer mandatario alimentaba la militarización de la respuesta peruana, pero al mismo tiempo proveía de armas a las FARC y negociaba con los narcotraficantes. Con la transición al gobierno de Toledo, el refuerzo policial y militar de la frontera peruana se ha mantenido y Perú ha apoyado de forma más enérgica la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

El tercer escenario es la presencia del conflicto colombiano en la política interna del Perú. Si bien el gobierno de Fujimori trató de utilizar a las FARC y su papel en el negocio de las drogas ilícitas para fines domésticos, el gobierno de Toledo ha rehusado esta estrategia a fin de distanciarse de la política de mano dura de su antecesor. En particular, el movimiento cocalero del Perú ha sido acusado de mantener vínculos con las FARC y con grupos cocaleros radicales de Bolivia, y que éste busca interrumpir la democracia en ese país. Cabe señalar que, según Rojas, esta postura ha sido del gobierno civil, y no de los militares, quienes están más preocupados con la

situación hacia el sur del país (Chile y Bolivia) que con Colombia, país con el cual existe una cooperación militar relativamente sólida.

En sus comentarios, Rut Diamint subrayó algunas contradicciones de la política de Brasil, entre ellas la supuesta distancia frente al problema colombiano y la amazonización de la estrategia de seguridad, y la percepción negativa que se tiene de las políticas de seguridad del presidente Uribe y la simultánea búsqueda de vía bilaterales de parte del gobierno de Lula para negociar con él.

En la discusión posterior se remarcó que no es la cuestión colombiana como tal la que permite entender el desplazamiento militar masivo de Brasil en las zonas de frontera, sino que el problema central es el creciente involucramiento de los Estados Unidos en Colombia y la región andina. En relación con lo anterior, se discutió que el sistema de vigilancia de la Amazonia (SIVAM) ha sido utilizado de forma creciente como instrumento de cooperación con Colombia en la zona fronteriza. Se señaló que la crisis colombiana no se ha regionalizado en términos de la generación de grandes preocupaciones regionales.

ESTADOS UNIDOS y PANAMÁ

Según Bruce Bagley, para Estados Unidos la región andina forma parte de un complejo regional de seguridad en el cual la presencia del hegemón ha cambiado sus principales dinámicas, y en donde las prioridades regionales en materia de seguridad son definidas de forma creciente por Washington. Además de los países andinos, este complejo de seguridad se extiende hasta Panamá y Brasil.

Lo anterior se explica en función del cambio en las percepciones y requisitos estadounidenses en materia de seguridad después de los hechos del 11/9, los cuales han implicado una expansión de su perímetro de seguridad más allá de las fronteras nacionales. La doctrina preventiva se traduce para el caso del hemisferio occidental en una expansión territorial de los intereses estadounidenses desde México, Centroamérica, Panamá, Colombia, Venezuela y Cuba, pero en donde el nudo gordiano está en Colombia. Según Bagley, si a esto le sumamos las tensiones actuales en el Medio Oriente, el hecho de que Colombia constituye una fuente de suministro de petróleo, carbón y energía hidroeléctrica, y que un tercio del comercio estadounidense todavía pasa por Panamá, el conflicto colombiano es un tema de interés en Estados Unidos.

Bagley recordó que el Plan Colombia, gestionado en 1999, comenzó a aplicarse en el año 2000, bajo la administración Clinton, en respuesta a las críticas republicanas de que el Presidente no tenía una política antidrogas. Asimismo, la política en Colombia sirvió de base para la formulación de la Iniciativa Regional Andina, con la cual la administración Bush ha buscado dar incentivos a los países vecinos para integrar a éstos a su estrategia antidrogas. La política antidrogas se ha visto complementada con un énfasis más reciente en la lucha antiterrorista, reflejado en el surgimiento del Plan Patriota, que constituye una política ofensiva contrainsurgente de las fuerzas armadas colombianas, en la cual ha participado activamente Estados Unidos. Bagley señaló que lo más llamativo de este Plan es que quien diseña las políticas estadounidenses hacia Colombia no es el Departamento de Estado, sino el Comando Sur, repercutiendo en una militarización de la relación bilateral y en la estrategia de Washington acerca de la soberanía efectiva, o espacios sin ley.

Luego de terminar su discusión del caso estadounidense, Bagley realizó una breve presentación del trabajo de Carla Pousa sobre Panamá, la cual comenzó con el señalamiento de que ese país tiene una población pequeña, no tiene fuerzas armadas, carece de políticas de defensa y de capacidad de control sobre sus corredores marítimos, y su frontera con Colombia de 225 kilómetros, y que es sujeta a sistemáticas incursiones de las FARC y los paramilitares. Ante la imposibilidad de velar por su propia seguridad, la estrategia de Panamá durante el gobierno de Mireya Moscoso fue la de entregarse a los Estados Unidos en función de una lectura estratégica de los cambios en la

El **Programa Latinoamericano del Wilson Center** crea un puente de diálogo entre los Estados Unidos y Latinoamérica para el intercambio de ideas, información y actividades. El Programa también provee de un foro a-partidario para la discusión de asuntos relacionados con Latino América y el Caribe en Washington, D.C., y para atraer la atención de los líderes de opinión y policy makers de todo el hemisferio occidental a estos temas. El Programa auspicia iniciativas en las áreas de Descentralización, Seguridad Ciudadana, Procesos de Paz Comparados, Creación de Comunidad en las Américas, relaciones entre E.E.U.U. y Brasil y relaciones entre E.E.U.U. y México.

El proyecto "Creando Comunidad en las Américas" es financiado por un generoso aporte de la **Fundación Ford**.

Director del Programa Latinoamericano: Joseph S. Tulchin
Subdirectora del Programa Latinoamericano: Cynthia Arnson
Coordinadora del Proyecto "Creando Comunidad": Melina Ginszparg

Redacción: Rut Diamint y Arlene B. Tickner
Edición: Cynthia Arnson y Melina Ginszparg



política estadounidense de seguridad luego del 11/9.

Las preocupaciones panameñas respecto de la crisis colombiana se relacionan con tres factores principales: el tráfico de drogas y armas en la frontera; el aumento en el número de refugiados colombianos; y las presiones de Estados Unidos para que Panamá colabore de forma más estrecha con el gobierno de Colombia. En respuesta a estas últimas, el gobierno panameño ha adoptado una postura de apoyo activo a Colombia en los foros regionales sobre seguridad y de comunicación permanente con Bogotá. Lo anterior ha repercutido en una mayor autonomía en el manejo del tema de los refugiados colombianos en territorio panameño, que es en última instancia el problema que más le preocupa a Panamá.

En sus comentarios, Raúl Benítez señaló que en el hemisferio occidental ha existido tradicionalmente un rechazo a las soluciones militares a conflictos como el colombiano. Tal vez por ello, las FARC han restringido sus operativos militares en las zonas de frontera para evitar cualquier posibilidad de que se invoquen mecanismos de defensa del sistema interamericano, como el TIAR. En consecuencia, frente al tema colombiano Estados Unidos está solo. Si bien algunos países de la región están dispuestos a colaborar con Washington en ciertos aspectos de su política de seguridad, han sido reacios a hacerlo en Colombia.

PERCEPCIONES DESDE COLOMBIA

Harvey Suárez y Marcela Ceballos centraron su discusión en el efecto bumerang que puede ocasionar el manejo de la crisis humanitaria en Colombia. La securitización de lo humanitario de parte del gobierno Uribe también ha permitido a los Estados Unidos prestar una menor atención a este problema dentro de su política en Colombia, la cual se va aplicando dentro de una lógica de seguridad post-11/9. Esta situación se ha vuelto aún más compleja con la implementación del Plan Patriota a partir de 2003, dado que la recuperación territorial sobre la cual esta ofensiva militar se fundamenta implica la necesidad de remover gente de las zonas de conflicto.

Arlene Tickner elaboró su presentación en torno a las percepciones sobre inseguridad y seguridad que existen en la región andina respecto de la crisis

colombiana. Formuló la hipótesis de que para entender la “regionalización” de ésta es necesario abordar la seguridad desde el concepto de la securitización, sus expresiones específicas en cada uno de los estados vecinos y sus efectos políticos concretos.

Tickner propuso que para mapear el complejo de seguridad andino hay que documentar las instancias de securitización que se dan en diversos niveles, incluyendo el doméstico, regional y global, así como la interacción entre ellas. Tickner afirmó que a nivel doméstico, la vulnerabilidad que caracteriza a los estados andinos es un factor determinante del tipo de amenazas que éstos identifican a su seguridad. En consecuencia, gran parte de las estrategias de securitización de Colombia y sus vecinos se relacionan con la defensa del estado ante amenazas a su control territorial, su institucionalidad y su régimen político. Muchas veces, este “dilema de inseguridad” de cada estado individual se manifiesta regionalmente en niveles considerables de conflicto entre los países de la zona y tiende a alimentar la percepción de que los vecinos son la fuente principal de amenaza a la seguridad.

Por último, el papel de las dinámicas globales es otro nivel que debe incorporarse al análisis de las dinámicas regionales de seguridad. Según Tickner, la política militar de los Estados Unidos (guerra contra las drogas y el terrorismo), constituye el factor principal a tener en cuenta aquí. En este sentido, Washington no solo ha trasladado su estrategia de seguridad a la zona andina, con lo cual las dinámicas regionales de seguridad han cambiado, sino que su creciente presencia en Colombia ha sido un aspecto determinante en la percepción de amenaza de los países vecinos.

Alfredo Rangel sostuvo que en gran medida el

Según Rangel, no existe entre las FARC una vocación de entrometerse en los problemas internos de otros países, con lo cual se han regionalizado las consecuencias del conflicto, pero no el conflicto en sí.

conflicto de Colombia persiste porque el 60% de la población vive en la pobreza, mientras que el 25% más pobre vive en las zonas de frontera del país. Lo anterior es lo que se “derrama” en las naciones vecinas y no la lucha armada como tal. Según Rangel, no existe entre

las FARC una vocación de entrometerse en los problemas internos de otros países, con lo cual se han regionalizado las consecuencias del conflicto, pero no el conflicto en sí.

Rangel afirmó que las percepciones de inseguridad respecto de Colombia se derivan de varios factores: primero, el flujo de migrantes en las fronteras; segundo, la visión que se tiene de la presencia y cooperación militar estadounidense; tercero, la utilización de un discurso oficial en Colombia que identifica al país como un país problema, lo cual tiende a deteriorar las relaciones de vecindad y cooperación con las naciones de la región; cuarto, el balance histórico de las relaciones colombianas con diversos países vecinos; y quinto, el peso específico de las fuerzas armadas en cada uno de los estados colindantes. Considerar que Colombia constituye una amenaza regional y global, es poco conducente al establecimiento de relaciones fructíferas entre los países de la región andina. En este sentido, Rangel formuló la necesidad de explorar otras estrategias desde Colombia, incluyendo una basada en la proyección del país como víctima de la cooperación externa con los actores armados, la venta ilegal de armas y municiones, y el consumo internacional de sustancias

ilícitas, factores que alimentan el conflicto interno.

En los comentarios, Ann Mason llamó a la reflexión sobre la construcción del lenguaje con el cual se describen los problemas de Colombia y sus vecinos. Colombia se describe con términos como amenaza, contagio, exportación, derrame y contaminación, todas expresiones inadecuadas para captar la dinámica de seguridad. En su lugar, propuso la necesidad de examinar la erosión de la normatividad andina y sus efectos para la seguridad. En el pasado, ésta había servido como instrumento regulador, que aunque rudimentario, generaba pautas de convivencia regional.

En la actualidad, existe un cúmulo de problemas domésticos en la región que han empezado a adquirir manifestaciones regionales. A pesar de ser esencialmente de carácter sociopolítico, éstos se están securitizando. Mason sugirió que la región andina constituye un ejemplo de una comunidad de inseguridad, producto de la inseguridad económica y política que caracteriza a los países de la región y la erosión del incipiente aparato comunitario andino.

THE WOODROW WILSON INTERNATIONAL CENTER FOR SCHOLARS

Lee H. Hamilton, Director

BOARD OF TRUSTEES

Joseph B. Gildenhorn, Chair; David A. Metzner, Vice Chair. Public Members: James H. Billington, Librarian of Congress; John W. Carlin, Archivist of the United States; Bruce Cole, Chair, National Endowment for the Humanities; Roderick R. Paige, Secretary, U.S. Department of Education; Colin L. Powell, Secretary, U.S. Department of State; Lawrence M. Small, Secretary, Smithsonian Institution; Tommy G. Thompson, Secretary, U.S. Department of Health and Human Services; Peter S. Watson, President and CEO, OPIC. Private Citizen Members: Joseph A. Cari, Jr., Carol Cartwright, Robert B. Cook, Donald E. Garcia, Bruce S. Gelb, Charles L. Glazer, Tamala L. Longaberger

WILSON COUNCIL

Bruce S. Gelb, President. Elias F. Aburdene, Jennifer Acker, Charles S. Ackerman, B.B. Andersen, Russell Anmuth, Cyrus A. Ansary, Lawrence E. Bathgate II, Theresa Behrendt, John Beinecke, Joseph C. Bell, Esq., Steven A. Bennett, Rudy Boschwitz, A. Oakley Brooks, Donald A. Brown, Melva Bucksbaum, Richard I. Burnham, Nicola L. Caiola, Mark Chandler, Peter B. Clark, Melvin Cohen, David M. Crawford, Jr., Melvin Cohen, William T. Coleman, Jr., David M. Crawford, Jr., Michael D. DiGiacomo, Beth Dozoretz, Elizabeth Dubin, F. Samuel Eberts III, I. Steven Edelson, Mark Epstein, Melvyn J. Estrin, Sim Farar, Susan R. Farber, A. Huda Farouki, Julie Finley, Roger Felberbaum, Joseph H. Flom, Esq., John H. Foster, Charles Fox, Barbara Hackman Franklin, Norman Freidkin, John H. French, II, Morton FUNGER, Gregory M. Gallo, Chris G. Gardiner, CPA,

Bernard S. Gewirtz, Gordon D. Giffin, Steven J. Gilbert, Alma Gildenhorn, David F. Girard-diCarlo, Esq., Michael B. Goldberg, Roy Goodman, Gretchen Meister Gorog, William E. Grayson, Ronald Greenberg, Raymond A. Guenter, Cheryl F. Halpern, Edward L. Hardin, Jr., John L. Howard, Darrell E. Issa, Benjamin Jacobs, Jerry Jasinowski, Brenda LaGrange Johnson, Shelly Kamins, James M. Kaufman, Edward W. Kelley, Jr., Anastasia D. Kelly, Christopher J. Kennan, Willem Kookyer, Steven Kotler, William H. Kremer, Raymond Leary, Dennis A. LeVett, Francine Gordon Levinson, Harold O. Levy, Frederic V. Malek, David S. Mandel, Esq., John P. Manning, Jeffrey A. Marcus, John Mason, Jay Mazur, Robert McCarthy, Esq., Linda McCausland, Stephen G. McConahey, Donald F. McLellan, Charles McVean, J. Kenneth Menges, Jr., Kathryn Mosbacher, Jeremiah L. Murphy, Martha T. Muse, John E. Osborn, Paul Hae Park, Gerald L. Parsky, Jeanne L. Phillips, Michael J. Polenske, Rob Quartel, Jr., John L. Richardson, Esq., Margaret Milner Richardson, Larry D. Richman, Carlyn Ring, Edwin Robbins, Robert G. Rogers, Juan A. Sabater, Alan M. Schwartz, Timothy R. Scully, C.S.C., J. Michael Sheperd, George P. Shultz, Raja W. Sidawi, Kenneth Siegel, Ron Silver, William A. Slaughter, James H. Small, Shawn Smeallie, Gordon V. Smith, Thomas F. Stephenson, Norma Kline Tiefel, Mark C. Treanor, Anthony G. Viscogliosi, Christine M. Warnke, Ruth Westheimer, Pete Wilson, Deborah Wince-Smith, Herbert S. Winokur, Jr., Paul Martin Wolff, Joseph Zappala, Richard S. Ziman, Nancy M.Zirk



Woodrow Wilson
International
Center
for Scholars

One Woodrow Wilson Plaza
1300 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20004-3027
www.wilsoncenter.org

